



El caso Millet y la operación Pretoria

por **Antonio Santamaría**

La sociedad civil catalana y los dos grandes partidos del país se han visto afectados de lleno por dos escándalos que han mostrado crudamente el funcionamiento de los mecanismos de reparto de poder en la Catalunya real. En un contexto económico depresivo, crece la desafección ciudadana respecto a una clase política cada vez más desacreditada y se crea un caldo de cultivo propicio para operaciones populistas.

El Palau de la Música Catalana, una de las joyas del modernismo, obra del arquitecto y militante de la Lliga Lluís Domènech i Muntaner, nació del encargo del Orfeó Català, fundado en 1891 por Amadeu Vives y Lluís Millet Pagès, (1867-1941) para disponer de una sede social. El proyecto, financiado con donaciones de los industriales y financieros que sesenta años antes habían pagado el Gran Teatro del Liceo, fue inaugurado en 1908. En esos años, la burguesía industrial estaba construyendo la metrópoli moderna, con sus paseos y avenidas pero también con su antítesis, la ciudad proletaria, con sus suburbios y sus bajos fondos, del Passeig de Gràcia al barrio de La Torrassa, donde acababa Cataluña y empezaba Murcia, según cuenta Candel.

La clase dirigente estaba formada por un selectivo y al mismo tiempo móvil círculo de unas trescientas familias estrechamente vinculadas por intereses económicos y lazos de parentesco, algunas de las cuales, como señala Vicens Vives, ya figuraban en el censo de fabricantes de 1829. Una “estructura altamente flexible”, por utilizar la expresión del historiador Albert García Balanyà, donde los fabricantes competían y cooperaban en los complejos ciclos de producción y comercialización del algodón o la lana.

La saga de los Millet

Desde el punto de vista simbólico ambas instituciones representan el alma musical de Catalunya, en la estela de la tradición coral de Anselm Clavé, y el último refugio de la identidad nacional amenazada en los duros tiempos de las dictaduras de los generales Primo de Rivera y Franco. La historia de ambas instituciones culturales se confunde con las vicisitudes de la familia Millet, originaria de l’Atmella del Vallès. Fèlix Millet Maristany (1903-1967) fue una figura clave del catalanismo católico del siglo XX. Hijo del acaudalado fabricante textil Joan Millet Pagès y sobrino del cofundador del Orfeó, se crió en el ambiente catalanista del Palau y el fervor católico del colegio de elite de los jesuitas de la calle Caspe. Su carrera universitaria de ingeniero no pasó del examen de acceso y como castigo le enviaron a la fábrica de los Viladomiu. La experiencia fue breve, el agraciado mozo se casó en 1926 con Montserrat Tusell Coll (1907-2001), hija del próspero industrial Xavier Tusell Gost, de Fábricas Reunidas de Caucho y Apósitos (FRACSA), con sucursales en Madrid y una docena de ciudades españolas. El suegro, que también presidía la compañía de seguros *Barcelona*, lo nombró gerente y pronto destacó por su habilidad para los negocios. En los años treinta *Barcelona*, que llevaba los seguros de la Ford,

fue adquirida por ese motivo por la multinacional italiana *Assicurazioni Generali*, con sede en Trieste. Todo un pelotazo. Millet fue nombrado directivo del Banco Vitalicio, vinculado a dicha firma.

Durante la República, la Iglesia catalana dirigida por el cardenal Vidal i Barraquer impulsó la participación de los católicos en vida pública y el acomodo con el nuevo régimen. Millet fue una pieza clave de esta estrategia, fundó con mosén Albert Bonet, en 1931, la *Federació de Joves Cristians de Catalunya*, (FEJOC), la organización juvenil católica más importante de la época, que llegó a contar al estallar la guerra con 14.000 afiliados. También participó en 1931 en la constitución del primer partido democristiano del Estado español, Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y fue el director de su órgano de prensa, el diario *El Matí*.¹

Durante los primeros meses de la guerra, a pesar de la fidelidad de la UDC a la República, los fejecistas fueron perseguidos por las Patrullas de Control de la FAI, acusados de “fefascistas”, y según Manent 400 de ellos fueron asesinados. Los Millet, que figuraban en esas listas negras, se escondieron un par de semanas hasta embarcar rumbo Marsella y de allí a Trieste, donde la firma italiana le dio un cargo directivo. En octubre de 1936 se trasladó en representación de *Assicurazioni Generali* a la Sevilla franquista, donde permaneció hasta el final de la contienda, cultivó relaciones con los jefes del régimen y cumplió con sus obligaciones militares en unos atenuados servicios auxiliares.

Al acabar la Guerra Civil compró una pequeña aseguradora que rebautizó *Compañía Hispano-Americana de Seguros y Reaseguros* que actuó durante la II Guerra Mundial como tapadera de las firmas de la Italia fascista vetadas por los Aliados. Una operación que evoca los negocios de Cambó con la eléctrica CHADE, de capital alemán, durante la Gran Guerra. Millet amasó una enorme fortuna y adquirió el modesto *Banco Popular de los Previsores del Porvenir* de Madrid, que convirtió en una poderosa entidad financiera y donde estableció alianzas con los banqueros del Opus. En 1945, *Assicurazioni Generali*, en agradecimiento a sus servicios, le regaló el 25% de las acciones del Banco Vitalicio y una participación en la casa madre. Millet aprovechó la reconstrucción de Europa y para levantar un imperio adquiriendo aseguradoras en Francia, Portugal, Italia, Marruecos y Argentina y operando en Alemania y Bélgica.

Mientras aposentaba su posición económica, medió ante la jerarquía eclesiástica para restaurar la FEJOC, dado su

apolicitismo y el martirologio sufrido. Los obispos Díaz Gomara en 1939 y Modrego Casaus en 1943 se negaron en redondo, el fejecismo tenía connotaciones catalanistas que Franco no permitiría jamás. Cerradas las vías legales, el catalanismo católico se reagrupó en la clandestinidad. Millet impulsó desde el Orfeó Català la celebración dels Jocs Florals (1941) y creó la fundación *Benèfica Minerva* (1943) para ayudar a los intelectuales que regresaban del exilio, como Maurici Serrahima, amigo y condiscípulo de los jesuitas, Josep M. de Sagarra, Ferran Soldevila o Carles Ribà. En 1944



compró la editorial SPES, editora de *El Matí*, donde trabajaba para costearse los estudios de Derecho Josep Benet, ex fejecista, ex militante de las juventudes de Unió y amigo de Serrahima. Ese mismo verano lo contrató como profesor particular de sus hijos y se convirtió en su secretario político.

Las Festes de l'Entronització de la Verge de Montserrat de 1947 señalan un punto de inflexión en la recomposición del catalanismo católico. La idea partió en 1945 del abad de Montserrat Aureli Maria Escarré y de Millet; para preparar el evento se creó la *Comissió Abat Oliba* con una red delegaciones comarcales. La concentración de masas debía servir

como acto de reconciliación entre todos los catalanes y cauterizar las heridas de la guerra fratricida. Millet designó a Benet su delegado personal, que adquirió un gran protagonismo por su incansable activismo. La Comissió Abat Oliva atrajo a muchos jóvenes y allí hicieron sus primeras armas Jordi Pujol, Joan Raventós, Alexandre Cirici o Josep Maria Ainaud.² Estaba prevista la presencia de Cambó rompiendo temporalmente su “exilio voluntario” en Argentina; su repentina muerte impidió un gesto que hubiera marcado época. El acto, donde por primera vez se permitió el uso público de la lengua catalana, mostró la capacidad de convocatoria del catalanismo católico y su potencial político, reuniendo a 60.000 personas.³

En 1951 Millet asumió la presidencia del Orfeó, que había ostentado su padre entre 1893 y 1901, y que desempeñaría hasta su muerte. Al final de su vida, jugó un papel importante en el proceso de secularización del catalanismo católico y de reconversión en nacionalismo personalista de la mano de la joven generación, agrupada en el CC fundado en 1955 y dirigido por el joven Jordi Pujol. En 1960 se produjeron los Fets del Palau que desencadenaron la detención, tortura, consejo de guerra de Pujol, quien emergió como líder de la nueva burguesía catalanista y democrática. Millet se interesó por escrito por su caso ante el ministro de Gobernación y el gobernador civil. Tras cumplir dos años y medio de los siete de condena, Pujol le envió una carta para pedirle una cita y agradecerle personalmente sus gestiones. En 1961 fue uno de los fundadores y primer presidente de Òmnium Cultural, entidad clave en el movimiento de recuperación y difusión de la lengua y cultura catalana, financiado por los empresarios nacionalistas como Pujol, Carulla, Cendrós, Cabana... de Banca Catalana.

Del enlace entre Fèlix Millet y Montserrat Tusell nacieron cinco hijos, el cuarto de los cuales, Fèlix Maria (1935), sería el protagonista del escándalo que ha conmocionado la sociedad catalana. En la década de 1960, sus dos hijos mayores, Joan y Xavier, se dedicaron a dirigir la Hispano-Americana y el Banco Vitalicio. Fèlix Maria, que estudió ingeniería técnica agrícola, fue enviado, para hacerse un hombre, a Guinea Ecuatorial como directivo de la Compañía Industrial de Fernando Poo (CAIFER), una de las muchas empresas familiares, dedicada a la plantación y comercialización de plátanos y cacao. De vuelta de África se licenció en direc-

ción de empresas en el IESE y se introdujo en el mundo de los negocios. En 1974, con dos miembros de la alta burguesía y prohombres de CiU, Josep Trias de Bes y Joaquim Molins, se hizo con el control de la compañía inmobiliaria *Renta Catalana*. En 1978, cuando empezaban a aflorar los problemas en Renta Catalana, fue nombrado presidente del Orfeó Català, uno de los cargos con más pedigree de la alta burguesía, en sustitución de otro peso pesado Joan Anton Maragall, marchante de arte, hijo del poeta Joan y tío del expresident Pasqual, quien como muchos militantes de la Lliga se presentó en Burgos para apoyar a Franco y que desde las Festes de l'Entronització había vuelto a la casa común del catalanismo.

Fèlix Maria tuvo un tropiezo con la justicia en 1983 que no fue óbice para su irresistible ascensión. Acusado de estafa por el caso Renta Catalana pasó dos semanas en prisión preventiva en La Modelo, delito del que fue absuelto, no así del de imprudencia y falsedad, por los que fue condenado a dos meses de cárcel y una multa de 30.000 pesetas en 1984. Ese

mismo año se constituyó el consorcio de administraciones públicas que garantizaba el futuro económico del Palau y en 1990 creó y presidió la *Fundació Orfeó Català-Palau de la Música* que le dio el control sobre las finanzas de las dos instituciones.

Hasta la irrupción de los Mossos d'Esquadra en el Palau, el 23 de julio de 2009, no faltaron avisos sobre las irregularidades de Millet y

su mano derecha, Jordi Montull. El 16 de marzo de 2000, Ernest Lluch denunció en *La Vanguardia* la postración del Orfeó criticando la gestión de Millet, cuyo principal interés no era la música sino “obtener ayudas económicas”, mediante obras de ampliación innecesarias. El 30 de marzo, entrevistado por el mismo rotativo y tradicional órgano de la burguesía, Millet rechazó estas acusaciones y defendió las obras para mejorar la calidad de las actuaciones de la Coral. Unas ampliaciones que según los expertos han conseguido arruinar la acústica del Palau y cargarse la caja de resonancia ideada por Domènech i Muntaner. En 2002 una nota anónima, que fue archivada, dirigida a la Delegación de Hacienda, acusaba al “inefable Millet” de desvío de fondos hacia sus intereses privados. Ese mismo año la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat presentó un informe sobre las graves irregularidades detectadas que cayó en saco roto.

Desde la Fundació, donde participan las principales

La Sindicatura de Cuentas presentó un informe sobre las graves irregularidades detectadas en el Palau que cayó en saco roto.

empresas e instituciones del país, Millet creó una plataforma personal que le permitió acceder a los consejos de administración de una veintena de entidades financieras, empresas de seguros, sanidad e inmobiliarias y triplicar su patrimonio inmobiliario. Mientras el expolio del Palau se realizaba prácticamente a la luz pública, Millet acumulaba honores y reconocimientos, desde la Creu de Sant Jordi, a la Clau d'Or de Barcelona, la Corbata de Isabel la Católica o el título *Ciutadà que ens honora* (Ciudadano que nos honra), concedido el año pasado en presencia del ministro de Cultura. Tras el escándalo, el Ayuntamiento de Barcelona se apresuró a detener los trámites de la concesión de la Medalla de Oro al mérito cultural.

El cántaro que tanto iba a la fuente, se rompió en junio de 2009, cuando la Fiscalía detectó un trasiego de reintegros bancarios, en billetes de 500 euros, al margen de la contabilidad del Palau, que sólo en el 2003 ascendía a un millón y medio de euros. El 23 de julio el Juzgado de Instrucción n. 30 ordenó a los Mossos d'Esquadra el registro del Palau e imputar a Millet y otros tres directivos de los cargos de apropiación indebida y falsedad. Aconsejado por sus abogados, Millet publicó una patética confesión pública en *La Vanguardia* de desfalcos y cobro de comisiones por valor de 3,3 millones de euros que utilizó para reformar sus propiedades, viajes a países exóticos o sufragar las fastuosas bodas de sus dos hijas. El hecho de que le cobrase a su consuegro 40.000 euros por los gastos de las nupcias, pagadas íntegramente por el Palau, escandalizó a la opinión tanto más que el hecho de que no ingresase en prisión y ni siquiera hubiera de pagar un euro de fianza.

El asunto adquirió una inquietante derivación política cuando se supo que la Fundació Ramon Trias Fargas, vinculada a CDC, había recibido 630.000 euros entre 1999 y 2001, 300.000 en dinero negro, del Palau. También se conoció que Àngel Colom, del extinto Partit per la Independència (PI), ahora en CiU, había cobrado 72.000 euros a fondo perdido para pagar las deudas del partido. En principio, líderes de CiU como Joaquim Ferrer, Josep Antoni Duran i Lleida o David Madí defendieron la legalidad y transparencia de estas donaciones, incluso Agustí Colomines, presidente de la Fundació Trias Fargas, aseguró

que se trataba de una maniobra del tripartito para desviar la atención sobre la crisis económica. No obstante, cuando la investigación reveló que Millet no estaba autorizado para firmar los convenios entre ambas fundaciones y que las donaciones eran ilegales, Artur Mas se vio forzado a prometer que devolvería estos fondos en cómodos plazos.

Las declaraciones de Jordi Pujol al programa de TV3 *Àgora* del 26 de octubre, con motivo de la publicación del segundo volumen de sus Memorias, mostraron la gravedad del caso y del fondo moral del asunto. Preguntado por el tema, invocó la siciliana ley del silencio y amenazó con airear los trapos sucios de otros partidos si se insistía en tirar de la manta. A

modo de respuesta, al día siguiente, el superjuez Garzón ordenaba la detención de sus estrechos colaboradores, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, implicados en una trama corrupta que mostraba la colusión entre el sector negocios de CDC y los sectores corruptos del aparato municipal del PSC. Lluís Prenafeta, industrial peletero, todopoderoso secretario General de Presidencia (1980-1990) y alter ego de Pujol, se vio obligado a dimitir por la querrela de la CNT que revelaba las flagrantes incompatibilidades entre sus empresas privadas y sus cargos públicos, querrela que fue archivada por el juez Pasqual Estevill. Más tarde se vio envuelto en los casos Huarte y Port Aventura, de los que salió absuelto. Macià Alavedra Moner, hijo de Joan Alavedra Segurañas,

poeta y secretario de la presidencia de la Generalitat de Francesc Macià y Lluís Companys, fue conseller de Governació (1982-1986), Industria (1988-1989) y Economía (1989-1997), y se vio envuelto en los pufos de Javier de la Rosa en Port Aventura e implicado en el increíble caso Estevill, que marcaron el fin de su carrera política.

El epicentro de la operación Pretoria parte de Santa Coloma de Gramanet, con la detención del alcalde Bartomeu Muñoz Calvet, del concejal de Urbanismo Manuel Dobarco y del director de Servicios Municipales Pasqual Vela. Además, ingresaron en prisión los promotores inmobiliarios Josep Singla (Proinosa), Lluís Casamitjana (Espais) y Manuel Carrillo de la empresa de limpieza madrileña Limasa. Las investigaciones apuntaban a ramificaciones de

Mientras el expolio del Palau se realizaba prácticamente a la luz pública, Millet acumulaba honores y reconocimientos,

Blas Muñoz Blaya, padre de Bartomeu Muñoz, encarna a esos sectores emergentes que, en los 40 y 50, los años del estraperlo, levantaron enormes fortunas surgidas de la nada

la red en los ayuntamientos de Sant Andreu de Llavaneras, reserva natural pepera, y la Badalona socialista.

Los amos de Santa Coloma

Santa Coloma es uno de los exponentes más claros de las monstruosas ciudades-suburbio de los años de desarrollismo franquista. A principios de los 50 contaba con unos 15.000 habitantes; en 1960, 32.000, y al morir Franco cerca de 140.000. La nueva población estaba formada por jornaleros andaluces que huían del hambre y la miseria de sus pueblos. El municipio creció de modo caótico, sin la más mínima planificación urbanística y careciendo de los servi-

loma como vendedor ambulante de caramelos, donde montó una pequeña fábrica y abrió una tienda en Barcelona. Como corresponsal del Banco Hispano Americano del municipio, aprendió el funcionamiento del dinero y se introdujo en el mundo de los negocios. En 1965 acumulaba un respetable patrimonio de entre 15 y 20 millones de pesetas. Tras superar algunos problemillas con el Tribunal Provincial de Contrabando y Defraudación, ingresó en la Falange (1964) y empezó su carrera política. Ese mismo año fue nombrado concejal y en 1969 vicepresidente local del Movimiento. En 1975, con el apoyo del gobernador civil, Martín Villa, accedió a la alcaldía, cuando era un hombre inmensamente rico y era

difícil pasearse por Santa Coloma sin cruzar por alguna de sus 500 viviendas. En febrero de 1975, recién nombrado alcalde, fue acusado por la empresa del sector La Suiza Catalana del Montseny, ante el Juzgado n. 7 de Barcelona, de usura en el descuento de letras bancarias. La querrela relata cómo se aprovechaba de la situación económica desesperada de muchas personas para ofrecerles préstamos personales a intereses exorbitantes y proceder al embargo de los pisos ante la falta de pago, una suerte de *escanya-pobres* como en la novela de Narcís Oller. Tras la intervención del gobernador civil, el magistrado, Joan Poch Serrats, archivó la querrela. Blas se mantuvo en la alcaldía hasta las primeras elecciones democráticas e intentó reciclarse encabezando la lista de UCD, de la que fue



cios públicos elementales.

Blas Muñoz Blaya, padre de Bartomeu Muñoz, fue el último alcalde franquista y uno de los mayores propietarios inmobiliarios del municipio. A diferencia del Millet de las sagradas familias de la alta burguesía, Muñoz encarna a esos sectores emergentes que, en los 40 y 50, los años del estraperlo, levantaron enormes fortunas surgidas de la nada, como el caso de los Lara de la editorial Planeta. Blas Muñoz, nacido en 1925 en Mazarrón (Murcia), llegó a Catalunya en 1942 con 128 pesetas en el bolsillo. Se instaló en Santa Co-

el único concejal electo.⁴

Esas municipales otorgaron una contundente victoria al cura rojo Lluís Hernández, del PSUC, la contrafigura moral y política de Blas Muñoz. A mediados de los 80, Santa Coloma fue el campo de la batalla entre comunistas y socialistas por el control del cinturón industrial tras el estallido del PSUC en 1981. El PSC apostó fuerte por Manuela de Madre, actual vicepresidenta del partido, que contó con el apoyo de Alfonso Guerra y de los aparatos de Madrid y Barcelona. En 1991, consiguió derrotar a Hernández y ostentó la alcaldía

hasta el 2002. Su sucesor, Bartomeu Muñoz, nacido en 1957, quien de joven recorría las viviendas del municipio para cobrar los alquileres paternos, ingresó en 1974 en la Federació Catalana (FC) del PSOE, donde destacó como uno de los militantes más activos. En 1981 fue elegido Primer Secretario de la poderosa Federación Barcelonés Nord del PSC, cargo que retuvo hasta su detención, y desde 1983 era concejal de Santa Coloma. Vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona desde 2004, formó parte de la comisión de control financiero del PSOE de 1988 a 2008 y desde esta fecha fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal. El caso Pretoria reveló que el alcalde de una de las fortalezas obreras residía en Turó Parc, una zona residencial del más alto standing de la Ciudad Condal.

La guardia pretoriana

Por falta de espacio no podemos describir los entresijos de la trama. En resumen, Prenafeta y Macià Alavedra –mano derecha e izquierda de Pujol– se dedicaban a captar (presuntamente) el dinero negro de la evasión fiscal de la burguesía hacia el paraíso fiscal de la isla de Jersey, fondos que posteriormente eran blanqueados en operaciones urbanísticas en el área metropolitana de Barcelona. Un movimiento que fue detectado en 1997 por la Audiencia Nacional en el curso de otra investigación. El ex diputado socialista Luís García Sáez –Luigi para los amigos– operaba como mediador y comisio- nista entre los evasores fiscales, los ayuntamientos socialistas y los promotores inmobiliarios. Luigi fue expulsado del partido tras ser imputado en 1999 por el caso AGT de estafa en obras públicas a los ayuntamientos socialistas de Mataró y Olesa de Montserrat, pero la querrela presentada por los subcontratistas acabó archi- vada en el 2001. De condición humilde, empezó su carrera política con 18 años, en 1973, cuando se afilió a la UGT y la FC del PSOE, liderada por Josep M. Triginer, también imputado en el caso AGT, donde conoció a Bartomeu Muñoz. Tras el Congreso de Unificación de las tres ramas del socialismo catalán en 1978, García Sáez fue elegido diputado en las primeras autonómicas (1980) como parte de la cuota ugetista del PSC, cargo que revalidó hasta 1992. Al parecer, la expulsión del partido no interfirió en sus relacio-

nes con los compañeros de partido.

El 2 de diciembre, el juez Garzón ampliaba las imputaciones a 11 personas más, entre ellas Emili Mas Margarit, gerente del Incasol, empresa pública catalana del suelo. Un cargo de primer nivel por quien Joaquim Nadal, conseller de

Obras Públicas, había puesto la mano en el fuego la víspera y que al día siguiente hubo de dimitir y ser suspendido de militancia del PSC, al igual que Juan Felipe Ruiz, consejero delegado de *Marina Badalona*.

Según el auto de Garzón, Emili

Mas realizó las mediaciones necesarias en sendas operaciones urbanísticas en el Prat de Llobregat y Cerdanyola del Vallès. Respecto a esta última se supo que Artur Mas, que en su juventud había trabajado en la empresa Tipel de Prenafeta, le puso en contacto con la concejala de Urbanismo del municipio. Además cayó otro pez gordo, Genis Carbó, ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat y coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona. En esta segunda tongada figuran Doris Malfeito, esposa de Alavedra y cotizada pintora en los círculos burgueses, la mujer de Prenafeta, Maria Lluïsa Mas, Manuel Valera, socio y chófer de Luigi, Lluís Falcó, técnico de urbanismo de Santa Coloma, Víctor Ros, ex alcalde del PP de Sant Andreu de Llavaneres y Antoni Jiménez, concejal socialista de dicho municipio y asesor urbanístico del ayuntamiento de Montcada i Reixac, gobernado por el PSC, algunas de cuyas operaciones inmobiliarias están bajo sospecha.

Las áreas grises

Los casos Millet y Pretoria muestran la colusión de intereses en las áreas grises de poder y el funcionamiento de los mecanismos de reparto de poder en la Catalunya real. La corrupción muestra su carácter estructural en el sistema de partidos español y catalán de la segunda restauración borbónica, recordando las prácticas de la primera. El tripartito de izquierdas ha sido incapaz de atajar la corrupción institucionalizada heredada del pujolismo, al punto que uno de los factores que permitió el acuerdo de los partidos catalanes sobre el Estatut fue el pacto de silencio sobre el 3%.

Ambos casos demuestran la inoperancia de los mecanismos de control de las instituciones en los niveles autonómi-

La abstención, ya muy elevada en las autonómicas, puede frisar dentro de un año el umbral que cuestione la representatividad del Parlament.

Uno de los factores que permitió el acuerdo de los partidos catalanes sobre el Estatut fue el pacto de silencio sobre el 3%.



co y municipal de la administración del Estado que han permitido operar durante años y en la impunidad a personajes como Millet, Muñoz o Luigi. Un fenómeno que no es privativo de Catalunya, como revela el caso Gürtel o los numerosos procesos abiertos contra alcaldes y concejales de todas las formaciones políticas en todas las Comunidades Autónomas del Estado. Finalmente, han sido instancias estatales, la Delegación de Hacienda en el caso Millet o la Audiencia Nacional en la operación Pretoria, las que han permitido romper el espesor de las redes clientelares y los silencios cómplices. En el caso Millet la podredumbre no emerge de la clase política, sino de la sociedad civil catalana, pero afecta al conjunto de las administraciones públicas. Esta vez el patriotismo no ha servido como escudo para eludir la unánime condena pública y aún es pronto para evaluar la profundidad de sus corrosivos efectos morales sobre una ciudadanía baqueada por la crisis y ante la ausencia de alternativas de regeneración democrática.

Estos escándalos han aflorado en un contexto económico depresivo. Prácticamente todas las empresas han reducido sus plantillas, muchas se han acogido a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y el paro afecta al 20% de la población activa. Las Caixes d'Estalvi han emprendido operaciones de fusión bajo la amenaza de intervención del Banco de España. La crisis ha puesto sobre la mesa los desequilibrios estructurales de un modelo económico donde el sector

inmobiliario y los servicios tiraban de la economía mediante el dinero barato, el crédito hipotecario fácil, la mano de obra barata y poco cualificada.

Este clima moral y político corrompido y el ambiente económico depresivo favorecen la extensión de la llamada "desafección" de la ciudadanía. Así la abstención, ya muy elevada en las autonómicas, puede frisar dentro de un año el umbral que cuestione la representatividad del Parlament. También propicia la aparición de movimientos populistas de sesgo soberanista, como el esbozado por la operación Laporta, presidente del Barça, a quien los sondeos le conceden una decena de diputados, y que podría romper la mayoría absoluta del tripartito. El referéndum sobre la independencia

celebrado el 13 diciembre en 161 municipios catalanes expresa el malestar de amplios sectores de las clases medias y su progresiva orientación hacia la opción soberanista.

El Estatut, pendiente de la diferida sentencia del Tribunal Constitucional, se ha convertido en el principal activo de una clase política cada vez más desacreditada. Las filtraciones sobre reuniones secretas entre Mas y Montilla para articular una respuesta común en caso de un fallo negativo del alto tribunal o el inaudito editorial conjunto publicado por doce diarios editados en Catalunya indican ese movimiento hacia la unidad catalanista contra el tradicional enemigo madrileño para recuperar su erosionada credibilidad política, al precio de tensar aun más las maltrechas relaciones con el resto de España ■

Notas

1. Ragner, Hilari. *La Unió Democràtica de Catalunya i el seu temps (1931-1939)*. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1976. Manent, Albert. *Fèlix Millet i Maristany. Líder cristià, financer, mecenes catalanista*. Ed. Proa, Barcelona, 2003. Libro hagiográfico que obtuvo el premio del año 2003 de la Fundació Trias Fargas, generosamente subvencionada por el hijo del biografiado.
2. Ibañez Escofet, Manuel. *La memòria és un gran cementiri*. Ed. 62, Barcelona, 1990.
3. Balcells, Albert. *Breve historia del nacionalismo catalán*. Alianza, Madrid, 2004.
4. Revista *Àgora*, nº 8. Santa Coloma de Gramanet, marzo 2003.